

FECHA DEL INFORME DE AUDITORÍA : 8 DE JULIO DEL 2021.
TIPO DE AUDITORÍA : FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD AUDITADA : FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA (FISE).
CÓDIGO DE RESOLUCIÓN : RIA-CGR- 791-2021
TIPO DE RESPONSABILIDAD : NINGUNA.

Contraloría General de la República. Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Managua, cinco de agosto del año dos mil veintiuno. Las diez y treinta minutos de la mañana.

ANTECEDENTES:

Al Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), se le practicó auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria, por período del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, por lo que la Dirección de Auditoría de Instituciones Gubernamentales de la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General de la República, emitió el informe de auditoría financiera y de cumplimiento de fecha ocho de julio del año dos mil veintiuno, con referencia **ARP-01-025-2021**. Cita el indicado informe, que la labor de auditoría se ejecutó de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua, en lo aplicable a ese tipo de auditoría y sobre la base de lo dispuesto en la Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado. Que durante el curso del proceso administrativo se dio la tutela y garantía del debido proceso y se cumplió a cabalidad con las diligencias mínimas del mismo, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Nicaragua y la referida Ley Orgánica de este ente fiscalizador para todas las personas vinculadas con el alcance de la referida auditoría, notificándosele el inicio del proceso administrativo de auditoría a los interesados, señores: **Carmen Ulanova Pineda Gurdíán**, responsable de la Oficina de Asesoría Legal; **Carlos Ramiro Mejía Urbina**, director de la División de Planificación y Seguimiento; **Celia Margarita Tapia Norori**, responsable de la Oficina de Planificación Institucional; **Eric Estrada Gómez**, responsable de la Oficina de Sistemas de Información; **Blanca Segovia Mendoza Arauz**, responsable de la Oficina de Contrataciones; **Teresa de Jesús Triviño López**, directora de la División Administrativa Financiera; **Emmett Humberto Durán Quiroz**, responsable de la Oficina de Finanzas; **Marcia Lorena González Torres**, responsable de la Unidad de Tesorería; **Fanny Mercedes Lumbí Guerrero**, responsable de la Unidad de Contabilidad; **Bertha Vanessa Espinoza Obregón**, responsable de la Unidad de Presupuesto; **Juana Elena Zúniga Cardoza**, responsable de la Oficina de Recursos Humanos; **Aurora María Grijalba Rizo**, responsable del Departamento de Coordinación de Gestión Territorial de Procesos; **Lizbeth Álvarez Soza**, responsable de la Oficina de Servicios Administrativos; **Héctor Iván Almendarez Cruz**, responsable de la Unidad de Transporte; **José Carlos Ferrufino Suarez**, responsable de la Unidad de Activos Fijos;

Alberto José Lacayo Álvarez, director de operaciones y desarrollo social; **Virgilio Antonio Bravo Plata**, administrador fiduciario; **Hortensia Arcely Róbelo Somarriba**, directora de la División de Adquisiciones; **Claribel Adriana Rodríguez**, responsable de la Unidad de Servicios Generales; **Arelys del Carmen Urbina Loásiga**, exresponsable del Departamento de Control y Seguimiento de las Operaciones; **Wendell Adolfo Marengo Baquedano**, exresponsable de la Oficina de Servicios Administrativos; **Luis Bernabé Zavala Canales**, exresponsable de la Oficina de Finanzas; **Mario Ismael Villagra Guido**, exresponsable de la Oficina de Sistemas de Información y **Ervin Ramón Juárez González**, jefe de la Unidad de Servicios Generales, todos de la entidad auditada. En cumplimiento a lo prescrito en el artículo 57 de la precitada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en el curso del proceso administrativo de auditoría se mantuvo constante comunicación con los servidores públicos de la entidad auditada. El veintiuno de mayo del año dos mil veintiuno, se dieron a conocer los resultados preliminares de auditoría a los servidores públicos ligados a las operaciones sujetas a revisión, quienes expresaron sus comentarios y fueron consignados en Acta.

RELACIÓN DE HECHO:

Refiere el informe que una vez cumplidos los objetivos de la labor de campo y aplicado los procedimientos de rigor los resultados conclusivos determinaron: **1) La Ejecución Presupuestaria** presentó razonablemente en todos sus aspectos importantes, la asignación y ejecución presupuestaria del Fondo de Inversión Social de Emergencia, por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en la Ley No. 1010, Ley Anual del Presupuesto General de la República del año dos mil veinte y su modificación (Ley No. 1050); la Ley No. 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario y su reforma (Ley No. 565); las Normas y Procedimientos de Ejecución y Control Presupuestario para el año dos mil veinte y las Normas de Cierre Presupuestario y Contable del Ejercicio dos mil veinte y sus Adendas; excepto por los registros de gastos en reglones que no se corresponden con su naturaleza, según el Manual de Clasificadores Presupuestarios. **2) Se determinaron hallazgos de control interno**, siendo estos: **a) El Manual de Normas Técnicas de Control Interno de la entidad**, se encuentra desactualizado y no cuentan con un Manual de Procedimientos para la División de Adquisiciones; **b) Gastos presupuestarios clasificados en reglones que no se corresponden con su naturaleza**, de conformidad con el Manual de Clasificadores Presupuestarios; y **c) Dictámenes de recomendación de adjudicación**, no describen los medios utilizados para determinar si los oferentes se encuentran o no afectados a las causales de prohibición. **3) Se realizó seguimiento a las recomendaciones de auditorías**, de un total de siete (07) recomendaciones contenidas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento a la ejecución presupuestaria de referencias ARP-01-018-2020 de fecha veinte de junio del año dos mil veinte; se han implementado tres (03) recomendaciones, dos (02) se encuentran en proceso de implementación y dos (02) no cumplidas para un grado de cumplimiento del cincuenta y siete por ciento (57%), y **4) Respecto a las transacciones examinadas**, el Fondo de Inversión Social de Emergencia, cumplió en todos los aspectos importantes con las leyes, normas y regulaciones aplicables, excepto por lo expresado en el párrafo base.

CONSIDERACIONES DE DERECHO:

La Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, en su artículo 9, numerales 1) y 11) dispone como atribución a esta entidad de control y fiscalización de los bienes y recursos del Estado, efectuar auditorías a las entidades y organismos de la administración pública, así como evaluar la ejecución presupuestaria. Que el artículo 28, párrafo segundo de la precitada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, infiere: El sistema de control y fiscalización tiene como objeto fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar eficazmente sus funciones logrando la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos de la administración pública, a fin de que este sea utilizado de manera eficiente, efectiva y económica, para los programas debidamente autorizados. Establecidas las bases legales para las labores de auditorías ejecutadas por la Contraloría General de la República, y sobre la base del artículo 95 de la ya mencionada ley orgánica, que confiere la facultad de la Contraloría General de la República de pronunciarse sobre las operaciones o actividades de las entidades y organismos sujetos a esta ley y sus servidores, así como para determinar responsabilidades, caso de haberlas, caducará en diez años, contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas operaciones o actividades. En el presente caso el informe de auditoría financiera y de cumplimiento, objeto de la presente resolución administrativa, cumple con los presupuestos, requisitos y procedimientos que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, así como las Normas de Auditoría Gubernamental; y en vista que los resultados de auditoría concluyeron en el caso concreto con hallazgos de control interno, así como falta de implementación de las recomendaciones derivadas de auditorías precedentes; en razón de ello, este Consejo Superior considera, como ente rector del sistema de control y fiscalización de los bienes y recursos del Estado, formular recomendaciones derivadas de las auditorías gubernamentales para mejorar las operaciones que permitan a las entidades y organismos del sector público una administración eficaz y transparente de los recursos del Estado; razón suficiente para que las recomendaciones se cumplan sin demora, situación que no sucedió en el presente caso, dado que hubo cumplimiento parcial, de tal manera se ordena por última vez a la máxima autoridad del Fondo de Inversión Social de Emergencia, implementar las recomendaciones de auditorías vencidas y aplicar las medidas correctivas establecidas en las recomendaciones de auditoría contenidas en el informe de autos conforme el artículo 103, numeral 2) de la Ley Orgánica de este ente fiscalizador, dado que éstas constituyen el valor agregado de la auditoría gubernamental para fortalecer los sistemas de administración, control interno y gestión. Que para su implementación dispondrá de un plazo razonable de sesenta (60) días, y dentro de ese término contará con treinta (30) días para cumplir con las recomendaciones pendientes de auditorías predecesoras, vencido el mismo deberá informar a este Consejo Superior sobre sus resultados. Se previene que de persistir en ello en las auditorías recurrentes, se procederá en su oportunidad al establecimiento de la responsabilidad conforme lo estipula el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

POR LO EXPUESTO:

De conformidad con los artículos 9, numerales 1) 11) 12) y 26), y 95 de la Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, los suscritos miembros del Consejo Superior, en uso de las facultades que la ley les confiere, acuerdan:

PRIMERO: Aprobar el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, de fecha ocho de julio del año dos mil veintiuno, con referencia: **ARP-01-025-2021**, emitido Dirección de Auditoría de Instituciones Gubernamentales de la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General de la República, derivado de la revisión efectuada a la ejecución presupuestaria del **Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE)**, por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte.

SEGUNDO: No hay méritos para establecer ningún tipo de responsabilidad a los servidores y exservidores públicos del Fondo de Inversión Social de Emergencia, señores: **Carmen Ulanova Pineda Gurdián**, responsable de la Oficina de Asesoría Legal; **Carlos Ramiro Mejía Urbina**, director de la División de Planificación y Seguimiento; **Celia Margarita Tapia Norori**, responsable de la Oficina de Planificación Institucional; **Eric Estrada Gómez**, responsable de la Oficina de Sistemas de Información; **Blanca Segovia Mendoza Arauz**, responsable de la Oficina de Contrataciones; **Teresa de Jesús Triviño López**, directora de la División Administrativa Financiera; **Emmett Humberto Durán Quiroz**, responsable de la Oficina de Finanzas; **Marcia Lorena González Torres**, responsable de la Unidad de Tesorería; **Fanny Mercedes Lumbí Guerrero**, responsable de la Unidad de Contabilidad; **Bertha Vanessa Espinoza Obregón**, responsable de la Unidad de Presupuesto; **Juana Elena Zúniga Cardoza**, responsable de la Oficina de Recursos Humanos; **Aurora María Grijalba Rizo**, responsable del Departamento de Coordinación de Gestión Territorial de Procesos; **Lizbeth Álvarez Soza**, responsable de la Oficina de Servicios Administrativos; **Héctor Iván Almendarez Cruz**, responsable de la Unidad de Transporte; **José Carlos Ferrufino Suarez**, responsable de la Unidad de Activos Fijos; **Alberto José Lacayo Álvarez**, director de operaciones y desarrollo social; **Virgilio Antonio Bravo Plata**, administrador fiduciario; **Hortensia Aracely Róbelo Somarriba**, directora de la División de Adquisiciones; **Claribel Adriana Rodríguez**, responsable de la Unidad de Servicios Generales; **Arelys del Carmen Urbina Loásiga**, exresponsable del Departamento de Control y Seguimiento de las Operaciones; **Wendell Adolfo Marengo Baquedano**, exresponsable de la Oficina de Servicios Administrativos; **Luis Bernabé Zavala Canales**, exresponsable de la Oficina de Finanzas; **Mario Ismael Villagra Guido**, exresponsable de la Oficina de Sistemas de Información y **Ervin Ramón Juárez González**, exjefe de la Unidad de Servicios Generales.

TERCERO: Remitir el informe de auditoría financiera y de cumplimiento y la certificación de lo resuelto a la máxima autoridad del **Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE)**, para que aplique las recomendaciones derivadas de los hallazgos de control interno reflejados en el informe en Auto, en un plazo no mayor de sesenta (60) días, y dentro de ese término contara con treinta (30) días para cumplir con las recomendaciones no aplicadas, debiendo informar a este órgano superior de control, una vez vencido el plazo. Se previene que de persistir en ello en las auditorías recurrentes se procederá en su oportunidad al establecimiento de las responsabilidades conforme lo estipula el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

La presente resolución administrativa está escrita en cinco (05) folios útiles de papel bond con membrete de la Contraloría General de la República, y fue votada y aprobada por unanimidad de votos en sesión ordinaria número mil doscientos cuarenta y cinco (1245) de las nueve y treinta minutos de la mañana del día cinco de agosto del año dos mil veintiuno, por los suscritos miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República. **Cópiese, notifíquese y publíquese.**

Dra. María José Mejía García
Presidenta del Consejo Superior

Lic. Marisol Castillo Bellido
Miembro Propietaria del Consejo Superior

Lic. Christian Pichardo Ramírez
Miembro Suplente del Consejo Superior

AAP/MLZ/LARJ
M/López